



78

AMPARO EN REVISION No. 1559/82.
RECTOR: BANCO NACIONAL DE MEXICO,
CO, S.A.

PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO: ALFONSO RIVERA AMARICIO.
Secretario: José Francisco Hernández Fonseca.

México, Distrito Federal.- Acuerdo del Tribunal Pleno correspondiente al día siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

VISTOS: y,
RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y uno, ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, Fernando Romero Figueroa, en su carácter de apoderado y representante legal del BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- H. Congreso del Estado de Chihuahua; b).- C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; c).- Tesorero General del Estado; d).- C. Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, Chihuahua; e).- C. Ministro de Hacienda adscrito a la Autoridad Fiscal con residencia en esta Población."

"ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del Congreso del Estado reclamo: La aprobación y expedición del Decreto que estableció el impuesto sobre nóminas, de fecha 25 de septiembre de 1979, mismo que reformó los artículos 166 al 172 del Código Fiscal del Estado; 2.- Del C. Gobernador Cons-



AMP. EN REV. 1559/82.

- 3 -

requerimiento y embargo levantadas respectivamente el día 9 y 13 del mes de Octubre de 1981."

Se señala como garantías violadas las que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

SEGUNDO.- Relata la parte quejosa como antecedentes:

"1.- Con fecha 25 de septiembre de 1979, la Legislatura Local aprobó el Decreto que establece el impuesto sobre nóminas, reformando los artículos 166 al 172 del Código Fiscal del Estado. Dicho Decreto fue promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, entrando en vigor el día 10. de Octubre de 1979."

"2.- El día 9 de Octubre del año en curso se constituyó ante el Banco Nacional de México, S.A., Sucursal Mina, con domicilio en la Calle Rafael Velarde # 461 de esta Población, el C. Ministro Ejecutor adscrito a la Recaudación de Rentas de esta Ciudad, exigiendo a la misma el pago de la cantidad de \$ [REDACTED] ([REDACTED] PESOS [REDACTED] MONEDA NACIONAL), por concepto del impuesto sobre nóminas, señalando como período del adeudo desde "Octubre 79 a la fecha", en cumplimiento de las instrucciones giradas por sus superiores. Habiéndose rehusado el pago de la cantidad requerida, el citado funcionario procedió a secuestrar el equipo y muebles de oficina propiedad de [REDACTED], entregando copia que contiene el mandato de ejecución debidamente firmado por el C. Lic. Lorenzo Holguín C., en su carácter de Recaudador de

Rentas de esta población, así como del acta de requerimiento y embargo levantada."

"3.- Con fecha 13 de Octubre del año en curso, el Ministro Ejecutor adscrito a la Recaudación de Rentas de esta Ciudad, se presentó en el domicilio del Banco Nacional de México, S.A., Sucursal Río Grande, sito en las Avenidas Vicente Guerrero y López Mateos de esta Ciudad, requiriéndole por el pago de la cantidad de \$ [REDACTED] ([REDACTED] PESOS [REDACTED] MONEDA NACIONAL), por concepto del impuesto sobre nóminas, por el período de "Octubre 79 a la fecha", en cumplimiento de las instrucciones giradas por sus superiores. Habiéndose rehusado el pago de la cantidad requerida, el citado Funcionario procedió a secuestrar los bienes muebles propiedad de mi representada, dejando una copia que contiene el mandato de ejecución debidamente firmado por el C. Lic. Lorenzo Holguín C., en su carácter de Recaudador de Rentas de esta población, así como del acta de requerimiento y embargo levantada."

"4.- Las autoridades Fiscales del Estado nunca antes habían exigido a mi mandante cantidad alguna por concepto del Impuesto sobre nóminas. Nunca tampoco lo ha liquidado en forma voluntaria, o se ha conformado con el mismo de manera alguna."

TERCERO.- En el escrito de demanda se formularon los siguientes conceptos de violación:

"a).- El artículo 73, fracciones X y XXIX, inciso I,

IMPRESA OFICIAL DE
LA NACION
MEXICO



AMP. EN REV. 1559/82.

- 5 -

so tercero, de la Constitución Federal, establecen a la letra:

"EL CONGRESO TIENE FACULTAD; Fracción X.- Para legislar toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, INSTITUCIONES DE CREDITO, etc.; Fracción XXIX inciso tercero: PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES: SOBRE -- INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES DE SEGUROS."

La Jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a los preceptos constitucionales transcritos, ha determinado (Tesis de Ejecutorias 1917 a 1975), Tercera Parte, Segunda Sala, número 223, página 379.

"SOLO LA FEDERACION PUEDE LEGISLAR EN LO TOCANTE AL ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTOS SOBRE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO. POR LO MISMO, CUALQUIER IMPUESTO QUE SE EXIJA A DICHAS INSTITUCIONES YA POR LOS ESTADOS O POR LOS MUNICIPIOS CON APOYO EN UNA LEY LOCAL, VIOLA EN PERJUICIO DE LA INSTITUCION AFECTADA LAS GARANTIAS DE LOS ARTICULOS 14 y 16 CONSTITUCIONALES."

"Atentas las transcripciones que anteceden, no cabe la menor duda que establecer y reglamentar el régimen fiscal de las instituciones de crédito, por disposición clara y expresa del Constituyente, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, quedando por tanto, excluidas de tal potestad las entidades federadas."

"En consecuencia, las disposiciones legales --

que se contienen en el Decreto del Estado de Chihuahua, (artículos 166 y 172 del Código Fiscal del Estado), mismos que establecen y reglamentan el Impuesto Sobre Nóminas, y que las autoridades fiscales están aplicando al - quejoso, resultan notoriamente inconstitucionales, toda vez que violan el texto expreso del artículo 73, fracciones X y XXIX, inciso tercero de la Constitución General de la República, pues como se ha visto, solo el Congreso de la Unión tiene potestad para legislar en materia de - instituciones de crédito, en términos generales y, en particular, sobre el régimen fiscal de las mismas, de lo que se infiere que también se infringe el artículo 124 - de la Constitución Federal, al entrañar el Decreto combatido, una invasión por parte de la Legislatura Local respecto de las facultades que expresa y constitucionalmente corresponden al Congreso de la Unión."

"b).- El Artículo 154 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Diciembre de 1978 y que entró en vigor a partir de Enero - de 1980, establece que los estados y municipios no tienen facultad para imponer carga alguna de carácter fiscal a las instituciones de crédito, salvo las excepciones contenidas en el propio precepto legal, y que no son otras que EL IMPUESTO PREDIAL, TRASLACION DE DOMINIO E IMPUESTOS MUNICIPALES POR COOPERACION. De lo anterior se concluye que la disposición legal invocada establece los casos de excepción, o sea, aquellas materias en que los e



AMP. EN REV. 1559/82.

- 7 -

los municipios les está permitido imponer cargas fiscales a dichas instituciones. No porque tengan facultad legislativa autónoma, sino por un facultamiento delegado que deriva de la propia legislación federal."

"Ahora bien, las reglas de excepción que se contienen en el artículo 154 citado, por su propia naturaleza, son de estricta aplicación, de tal manera que solo son aplicables específicamente a los casos que prevee la misma, en los cuales no se mencionan ni queda comprendido el impuesto sobre nóminas."

"c).- La actualización del Decreto impugnado a través de los actos de autoridad concretos de aplicación, realizados por las responsables, mediante la determinación de los adeudos fiscales que atribuyen a mi mandante, así como el cobro y requerimiento de pago respecto de los mismos, integran con toda propiedad el concepto de lesión o perjuicio que sufren mi representado en su patrimonio y derechos, fundando precisamente en dicha lesión el interés jurídico de la acción constitucional que se ejercita, con apoyo en los artículos 103, fracciones I y III y ~~Co~~, fracciones I y IV de la Constitución Federal."

"De lo anteriormente expuesto se concluye en primer lugar, que el Decreto combatido viola el sistema de competencias entre la Federación y los Estados, que se traduce en una invasión por parte de la Legislatura Local en materias que son de su competencia exclusiva del Congreso de la Unión, como es todo lo relativo a las ins



DE JUSTICIA

tituciones de crédito y su régimen fiscal. Estando colocada la parte quejosa precisamente en esa hipótesis (Institución de Crédito), trae como resultado que las autoridades responsables pretenden privar a mi representada de sus propiedades, posesiones y derechos, sin que en el caso exista un mandamiento de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, con lo cual se conculca en perjuicio de mi representado las garantías que protegen los artículos 14 y 16 Constitucionales."

"VI.- El Artículo 73, fracciones X y XXIX, inciso primero de la Constitución Federal es el precepto legal que define la facultad exclusiva de la Federación en materia de instituciones de crédito y en particular, el régimen fiscal de las mismas, potestad que están invadiendo las autoridades responsables mediante la aplicación del Decreto que se combate."

CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la demanda por auto de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y uno, y seguido el juicio por sus demás trámites legales, dictó sentencia que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"Unico.- SE SOBREESEE en el presente juicio de garantías promovido, por el Licenciado FERNANDO ROMERO FIGUEROA, en su carácter de Apoderado y Representante legal del BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., contra los Decretos que reclama del H. Congreso del Estado de Chihuahua y --

ESTADO DE CHIHUAHUA
SUPLENTE DE
DE LA CORTE DE
MEXICO



AMP. EN REV. 1559/82.

- 9 -

otras autoridades, actos que se precisaron en el resultando primero de este fallo."

"Notifíquese personalmente".

La sentencia se apoya en las siguientes consideraciones:

"Cuarto.- Antes de entrar al análisis de los conceptos de violación expresados por el Apoderado y Representante Legal de la parte quejosa, procede examinar si existen o no causales de improcedencia, por ser cuestión de orden público que debe resolverse con prelación al análisis de dichos conceptos; al efecto, se advierte que la Institución de crédito quejosa reclama en primer término del H. Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del Decreto de fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y nueve; que estableció el impuesto sobre nóminas y del Gobernador -- Constitucional del Estado: la sanción, promulgación y publicación del referido Decreto en el Periódico Oficial -- del Estado, que entró en vigor el día primero de octubre de mil novecientos setenta y nueve; sin embargo, de la transcripción de los conceptos de violación que se expresaron en el presente caso, se advierte que los mismos no fueron tendientes a demostrar que el Decreto impugnado es inconstitucional, ya que no van encaminados a demostrar que es inconstitucional dicho Decreto, ya sea por incompatibilidad con algún convenio de coordinación fiscal celebrado entre el Gobierno Federal y los Estados, -

a través del cual se gravan ciertas fuentes; tampoco se impugna el decreto por incumplimiento de requisitos formales o materiales para su integración, o si debió establecer alguna excepción en cuanto a su aplicación; es decir, no se señala concretamente de qué adoleció o adolece el decreto para poder tildarlo de inconstitucional. Los conceptos de violación expuestos van dirigidos a demostrar que los actos de aplicación del decreto reclamado son inconstitucionales, mismos que no pueden ser atribuíbles a las autoridades legislativas. En consecuencia, cuando en casos como el presente en que rige el principio de estricto derecho no existe la expresión de un razonamiento jurídico concreto contra la esencia del decreto reclamado, para poner de manifiesto ante este Tribunal que es contrario a la constitución, se está en la imposibilidad de hacer el análisis constitucional del acto reclamado, lo cual motiva el sobreseimiento en el juicio por omisión a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que determina la improcedencia de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el citado 116, ambos de la Ley de Amparo."

"En cuanto a lo que se reclama del C. Recaudador de Rentas y Ministro Ejecutor adscrito a dicha recaudación, ambos con residencia en esta ciudad, relativo a los mandamientos de ejecución y requerimiento de fecha seis de octubre del año en curso, así como la ejecución de los mencionados mandamientos, bien se podría analizar



AMP. EN REV. 1559/82.

- 11 -

si los actos de ejecución del decreto en cuestión (por parte de las mencionadas autoridades), se realizaron correctamente, o si la autoridad encargada de aplicar la ley lo hizo indiscriminadamente incluyendo a la Institución de Crédito, habida cuenta que el decreto no fue --- emitido por el Congreso de la Unión, quien ~~tiene~~ ^{tiene} facultad exclusiva para legislar sobre dichas instituciones, y para establecer contribuciones sobre las mismas, según lo señala el artículo 73, fracciones ~~X~~ ^{XXIX} y XXIX, inciso tercero de la Constitución Federal. Sin embargo en el presente caso no es posible analizar si dichos actos de aplicación fueron violatorios de las garantías individuales invocadas por la parte quejosa, dado que la autoridad responsable los revocó con fecha treinta de octubre del año en curso, lo cual ~~se~~ ^{se} desprende del informe con justificación que dicha autoridad emitió a este Juzgado, por lo que con lo ~~anterior~~ ^{anterior} cesaron los efectos de dichos actos, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo ~~72~~ ⁷² fracción XVI de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en ~~el~~ ^{el} artículo 74, fracción III del citado ordenamiento legal, quedando expeditos los derechos de la quejosa, en caso de emisión de un nuevo acto de la propia naturaleza para ser impugnado en la vía procedente."

QUINTO.- Inconforme con el fallo antes citado la quejosa interpuso el recurso de revisión.

Recibidos el expediente y escrito de revisión -

correspondiente en este Alto Tribunal, su Presidente a través de proveído de veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos, admitió el recurso de revisión de referencia.

El Agente del Ministerio Público Federal no formuló pedimento alguno.

Por auto de primero de julio de mil novecientos ochenta y dos, notificado el catorce siguiente, se turnó este asunto para que formulara el proyecto de resolución correspondiente al Ministro Relator.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 84, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo y en la fracción IV bis, inciso b), del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por interponerse dicho recurso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 166 al 172 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, argumentando que éste invade la esfera de la autoridad federal.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión los siguientes agravios:

"Unico.- Violación de los artículos 10., 22 --





AMP. EN REV. 1559/82.

- 13 -

fracción I, 77, 73, fracciones XII y XVIII y 116, fracción IV de la Ley de Amparo:"

"I.- Sostiene el Juez Federal en la resolución recurrida que los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, no fueron tendientes a demostrar que el decreto impugnado es inconstitucional, sea por incompatibilidad con algún convenio de coordinación fiscal celebrado entre el Gobierno Federal y los estados, a través del cual se graven ciertas fuentes; tampoco se impugnó el Decreto por incumplimiento de requisitos formales o informales para su integración, ni se debió establecer alguna excepción en cuanto a su aplicación; es decir, no se señala concretamente de qué adoleció o adolece el decreto para poder tildarlo de inconstitucional. Los conceptos de violación expresamente van dirigidos a demostrar que los actos de aplicación del decreto reclamado son inconstitucionales, mismos que no pueden ser atribuibles a las autoridades legislativas".

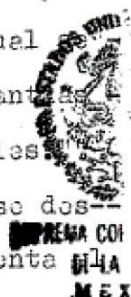
Contrariamente a lo que sostiene el C. Juez de Distrito, en la demanda de garantías, entre otros conceptos de violación, se invocaron los siguientes:"

"En consecuencia, las disposiciones legales que se contienen en el Decreto del Estado de Chihuahua (artículos 166 a 172 del Código Fiscal del Estado) mismos que establecen y reglamentan el impuesto sobre nóminas y que las autoridades fiscales están aplicando al quejoso, resultan notoriamente inconstitucionales, toda vez que violan el --

texto expreso del artículo 73, fracción X y XXIX, inciso tercero de la Constitución General de la República, pues como se ha visto, solo el Congreso de la Unión tiene potestad para legislar en materia de instituciones de crédito en términos generales y, en particular, sobre el régimen fiscal de las mismas, de lo que se infiere también que se infringe el artículo 124 de la Constitución Federal, al entrañar el Decreto combatido una invasión por parte de la Legislatura Local, respecto de las facultades que expresa y constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión."

"..... el Decreto combatido viola el sistema de competencias entre la federación y los estados, que se traduce en una invasión por parte de la Legislatura Local en materias que son competencia exclusiva del Congreso de la Unión, como es todo lo relativo a las instituciones de crédito y su régimen fiscal. Estando colocada la parte quejosa precisamente en esa hipótesis (instituciones de crédito), trae como resultado que las autoridades responsables pretendan privar a mi representada de sus propiedades, posesiones y derechos, sin que en el caso exista un mandamiento de autoridad competente, que funden y motiven la causa legal del procedimiento, con lo cual conculca en perjuicio de mi representada las garantías que protegen los artículos 14 y 16 Constitucionales."

"De las transcripciones que anteceden se desprende precisamente lo contrario de lo que argumenta





AMP. EN REV. 1559/82.

- 15 -

ad quo, ya que no es cierto que los conceptos de violación van dirigidos a demostrar que los actos de aplicación del Decreto son los que determinan la inconstitucionalidad del mismo. No es cierto tampoco que dichos actos se hayan atribuido a la Legislatura responsable. Sino - precisamente lo contrario, se reclaman los actos de aplicación concretos de las autoridades administrativas por fundarlos en un Decreto cuyas disposiciones son contrarias a la Constitución Federal, en los términos antes señalados."


"La actualización del Decreto impugnado a través de los actos de autoridad concretos de aplicación, - realizados por las responsables, mediante la determinación de los adeudos fiscales que atribuyen a mi mandante, así como el cobro y requerimiento de pago respecto de los mismos, integran con toda propiedad el concepto de lesión o perjuicio que sufre mi representada en su patrimonio y derecho (inciso C relativo a conceptos de violación que se contienen en la demanda de garantías)."

"Siendo el agravio personal una de las condiciones esenciales de procedencia del juicio de amparo, es el acto de aplicación de la ley combatida el que lo actualiza y funda el interés jurídico del quejoso. Pero esto no significa como sostiene el a quo, que los conceptos de violación van dirigidos a demostrar que los actos de aplicación son inconstitucionales por sí mismos, sino por el contrario y así se desprende de la demanda de garantías

DE JUSTICIA
FEDERAL

que se combatió en primer término la inconstitucionalidad de la ley, y después, los actos posteriores de aplicación que realizaron las autoridades administrativas responsables. Pero la ilegalidad de éstos últimos no se hizo consistir en defectos propios, sino por derivar y fundarse en una ley contraria a la Constitución."

"El hecho que también deban reclamarse los actos concretos de aplicación del decreto impugnado, y que deban vincularse a éste último, por razones obvias, no autoriza al C. Juez de Distrito a confundir las dos situaciones jurídicas que aunque vinculadas, son esencialmente diversas."

"Independientemente de que el decreto impugnado pudiera considerarse como una ley autoaplicativa, al transcurrir el término de treinta días que establece la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo, requiere de cualquier manera, como condición de procedibilidad de la acción constitucional, un acto posterior de aplicación concreta que afecte la esfera jurídica del quejoso, por la equiparación expresa contenida en la fracción XII del artículo 73 del Texto Legal en cita, ya que transcurrido el término de treinta días señalado, el Legislador, del mismo tratamiento a las leyes autoaplicativas y  cativas. En el caso particular, los actos de aplicación concreta se hicieron consistir en la determinación de los adeudos fiscales a cargo de mi mandante, los mandamientos de ejecución y requerimiento de pago, así como el embargo y embargo de bienes propiedad de la quejosa, emanados



Amp. en Rev. 1559/82.

- 17 -

éstos últimos, y, ejecutados por el C. Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, Chihuahua, como autoridad responsable."

"Al sostener el ad quo pues, que la inconstitucionalidad de los conceptos de violación van dirigidos a demostrar que los actos de aplicación del Decreto reclamado son inconstitucionales, sin vincular su razonamiento a la ley impugnada y a los conceptos hechos valer en contra de la misma, el C. Juez de Distrito altera y de forma la litis constitucional en violación de los artículos 10., 22, 73, fracción XIII, 76 de la Ley de Amparo, haciendo también una inexacta aplicación de los artículos 73, fracción XVII y 116, fracción IV de la misma Ley."

"II.- Sostiene el Juez Federal que los conceptos de violación no van encaminados a demostrar su inconstitucionalidad, porque no se reclamó "si debió establecerse alguna excepción en cuanto a su aplicación". Tal razonamiento carece de toda consistencia jurídica, toda vez que el Decreto impugnado sujeta al pago del impuesto sobre nóminas a todas las personas físicas o morales, dentro de cuya definición general se encuentra comprendido el quejoso, por las actividades que desarrolla en su calidad de institución de crédito y patrón, invadiendo facultades de la autoridad federal, en contravención del artículo 73, fracciones X y XXIX y artículo 124 de la -- Constitución Federal, los que expresamente estatuyen que las instituciones de crédito están sujetas a un régimen

fiscal especial, cuya facultad de reglamentación radica - en forma exclusiva en el Congreso de la Unión. Y contrariamente a lo que sostiene el ad quo, reclamar la ley por la incompatibilidad inconstitucional señalada, significa que se incluye en la misma al quejoso, a pesar de estar - colocado en la hipótesis de una norma excepcional prevista en la propia Constitución, o lo que es lo mismo, que el - Legislador Local debió excluirlo por ese motivo. Pero reclamar la sujeción a una ley contraria a la Constitución, significa al mismo tiempo y lleva implícito la negativa, - es decir, que no se debió incluir o que debió excluirse, por lo que el Juez de Distrito aunque en otras palabras, en esencia está invocando los mismos argumentos que se contienen en la demanda de garantías."

"En consecuencia, la "excepción" que supuestamente debió reclamarse y a que se refiere el ad quo, está comprendida en los conceptos de violación hechos valer oportunamente, por lo que altera y deforma la litis constitucional, en contravención de lo que disponen los artículos 40. y 77 de la Ley de Amparo, violando también, por inexacta aplicación los artículos 73, fracción XVIII y -- 116, fracción IV de la Ley de Amparo."

"Del mismo defecto adolece la pretensión del Juez Federal de vincular al caso que nos ocupa los convenios de coordinación fiscal celebrados por el gobierno federal y estatal, toda vez que no guardan relación con la litis planteada en la demanda de garantías."





AMP. EN REV. 1559/82.

- 19 -

"Después de iniciado el juicio de garantías las autoridades administrativas responsables negaron los actos reclamados, salvo el C. Recaudador de Rentas, quién habiéndolos admitido inicialmente procedió a revocarlos con posterioridad, razón por la cual el Juez Federal consideró actualizada la causal de improcedencia por tanto, decretó el sobreseimiento del juicio de amparo. Con base en lo anterior, el Juez de Distrito debió abstenerse de examinar la inconstitucionalidad del decreto reclamado. Al no hacerlo agravia a mi representada no sólo por la violación de los preceptos legales en que funda el mismo sobreseimiento, sino además, por lo infundado de los razonamientos que invoca, los que por su propia naturaleza exponen a considerar consentidos éstos, y por tanto, la propia Ley reclamada, de no combatirlos en la forma que antecede."

TERCERO.- Los agravios que hace valer la recurrente son inoperantes, porque aun cuando el Juez de Distrito haya invocado la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 116 del mismo ordenamiento legal, debe tomarse en consideración que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la Ley o Reglamento del que concierne al de su aplicación, porque no es posible jurídicamente entrar al

examen de la ley en abstracto, es decir, en forma desligada de los actos de aplicación, porque independiente-- mente de que no se surte la afectación a los intereses jurídicos de la quejosa, la eventual protección constitucional carecería de eficacia en razón de que es el acto concreto de aplicación el que causaría perjuicio al quejoso y no la simple existencia de la ley o reglamento considerados en abstracto.

La estrecha relación entre el ordenamiento general y el acto concreto de aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a).- Que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la Ley o Reglamento; b).- Que la negativa del amparo contra éstos últimos, por estimarse que éstos no adolecen de la inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c).- Que la concesión del amparo contra la Ley o Reglamento por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también, el acto de aplicación.

Criterio similar al anterior, fue establecido --





AMP. EN REV. 1559/82.

- 21 -

por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 5381/73, - promovido por SERGIO FAJARDO ORTIZ, aprobado por unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, - Iñárritu, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Galleja García, León Orantes, Olivera Toro y Presidente: Rebolledo. - Ponente el señor Ministro: Alfonso López Aparicio.

En consecuencia, como en el caso el Decreto combatido se impugna a través de actos de aplicación y -- respecto de éstos últimos, el juicio de garantías fue sobreseído con apoyo en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del citado acto de aplicación del Decreto reclamado; es obvio que en el presente caso y siguiendo el criterio expuesto con antelación, debe confirmarse el sobreseimiento del juicio de garantías respecto de los actos de formación legislativa del Decreto impugnado, por un motivo diverso al invocado por el actor, como lo es la causal de improcedencia -- prevista en la fracción V del artículo 73 del ordenamiento legal citado, por no surtirse en la especie, la afectación al interés jurídico de la quejosa, respecto a los actos de referencia.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, inciso

a) de la Constitución Federal, 90, 91 y 92 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., contra las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, volver los autos al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Iñárritu, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Del Río, Calleja García, León Crantes, Clivera Toro y Presidente: Rebolledo.- Ponente el señor Ministro: Alfonso López Aparicio.

Firman los CC. Presidente y Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

PRESIDENTE:

MARIO G. REBOLLEDO F.

PONENTE:

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

ALFONSO LOPEZ APARICIO.

MANUEL TORRES BUENO.

6 ABR. 1983

En se pasa este asunto al C. Actuario para la notificación del auto que antecede Consta.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

11 ABR. 1983

En ... y por medio de lista, se
notificó la resolución a ... las partes y al Ministerio Público
Federal. Conste.

[illegible]